



Resolución No. 0514 de 2013 14 MAYO 2013

“Por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0127 del 25 de febrero de 2013, expedida por la Subsecretaría de Planeación Territorial”

LA SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL

En uso de las facultades legales, en especial de las conferidas por los artículos 17, 34, 76 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la Resolución No. 0088 del 1 de febrero de 2007, el Decreto Distrital 16 de 2013, el Decreto Nacional 2181 de 2006 y,

CONSIDERANDO

Que el Decreto Nacional 2181 de 2006, modificado por el Decreto Nacional 4300 de 2007, reglamenta parcialmente las disposiciones relativas a Planes Parciales contenidas en la Ley 388 de 1997 en lo concerniente al procedimiento a seguir para la adopción de un plan parcial.

Que mediante Resolución 0277 del 24 de marzo de 2011 se adoptaron las determinantes para la formulación del Plan Parcial de Renovación Urbana “El Pedregal” ubicado en la localidad de Usaquen.

Que en contra del anterior acto administrativo se interpusieron los siguientes recursos: la firma Inversiones Arboleda y Cia. S. en C. mediante radicación 1-2011-14050 interpuso recurso de reposición y la Caja de Retiro de la FF.MM mediante radicación 1-2011-18702 interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, los cuales fueron resueltos mediante Resoluciones 0974 de 2011 y 0479 de 2012 respectivamente. El recurso de apelación fue notificado de manera personal el día nueve de abril de 2012.

Que el 24 de julio de 2012, el señor Julián Bonilla Nieto, representante legal de la sociedad comercial Aldea Proyectos S.A. presentó mediante radicación No. 1-2012-32153 la formulación del Plan Parcial de Renovación Urbana “El Pedregal” (folios 737-742).

Que el 1 de agosto de 2012, la Secretaría Distrital de Planeación requirió mediante comunicación No. 2-2012-32011 a la sociedad Aldea Proyectos S.A. para que complementara la información y documentación requerida para dar trámite al estudio de la formulación del Plan Parcial. Dicho requerimiento se realizó de conformidad con lo establecido en el parágrafo primero del artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) (folios 744-745).

Que el 24 de agosto de 2012, el señor Julián Bonilla Nieto, representante legal de la sociedad comercial Aldea Proyectos S.A. allegó mediante radicación No. 1-2012-37244 la documentación solicitada mediante oficio No. 2-2012-32011 (folios 755-765).

aw



Continuación de la Resolución No. 0514 de 2013 **14 MAYO 2013**

“Por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0127 del 25 de febrero de 2013, expedida por la Subsecretaría de Planeación Territorial”

Que el 28 de septiembre de 2012, la Secretaría Distrital de Planeación mediante comunicación 2-2012-41356 informó al señor Julián Bonilla Nieto, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 27 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 180 del Decreto Ley 019 de 2012, se decretaba la prórroga por el termino de 30 días hábiles para realizar el estudio de la formulación del Plan Parcial por parte de la Secretaría Distrital de Planeación, sin perjuicio de las demás suspensiones de términos establecidos en la ley (folio 788).

Que el 16 de noviembre de 2012, la Secretaría Distrital de Planeación mediante comunicación 2-2012-49177 requirió al promotor del Plan Parcial para que allegara a la actuación administrativa el estudio de tránsito debidamente aprobado por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad en el plazo máximo de un mes, prorrogable por un mes más, so pena de que la solicitud se entendiera desistido en los términos del artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). Lo anterior, en razón a que dicho estudio es de vital importancia para la las observaciones de que trata del artículo 9 del Decreto Nacional 2181 de 2006 (folio 824).

Que el 14 de diciembre de 2012, el señor Julián Bonilla Nieto solicitó a la Secretaría Distrital de Planeación mediante comunicación 1-2012-56150 la suspensión de los términos del proceso actualmente en curso por un plazo de noventa (90) días calendario (folio 842).

Que el día 20 de diciembre de 2012, la Secretaría Distrital de Planeación mediante comunicación 2-2012-54863 informó al promotor del Plan Parcial que teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 6 del Decreto Distrital 596 de 2007, se procedería a la prórroga del término establecido en el oficio 2-2012-4977 por un término de cuarenta y cinco días, contados a partir del vencimiento del término inicialmente establecido en dicho oficio (folio 843).

Que el día 22 de febrero de 2013 el señor Julián Bonilla Nieto solicitó a la Secretaría Distrital de Planeación mediante comunicación 1-2013-11905 la suspensión y/o prórroga de los términos del proceso administrativo en curso por un plazo de cuarenta y cinco (45) días (folios 862).

Que el día 25 de febrero de 2013, la Subsecretaría de Planeación Territorial resolvió no acceder a la solicitud de prórroga de términos solicitada mediante radicación 1-2013-11905 por ser dicha solicitud extemporánea, ya que el plazo máximo para allegar el estudio de tránsito vencía el día 20 de febrero de 2013, y en consecuencia se dio por desistida la formulación del proyecto de Plan Parcial de Renovación Urbana “El Pedregal” en los términos del artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (folios 879-880).

Que el día 22 de marzo de 2013, la señora Liliana Hurtado Casas, actuando en nombre y representación de la Aldea Proyectos S.A. y la doctora Margarita María Perdomo Martínez, en calidad



Continuación de la Resolución No. 0514 de 2013 14 MAYO 2013

“Por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0127 del 25 de febrero de 2013, expedida por la Subsecretaría de Planeación Territorial”

de apoderada especial de Helm Fiduciaria S.A., mediante radicación 1-2013-23862 interpusieron recurso de reposición contra la Resolución No. 0127 del 25 de febrero de 2013 (folio 917-929)

RAZONAMIENTOS DEL DESPACHO

Corresponde a esta instancia decidir el recurso de reposición interpuesto la señora Liliana Hurtado Casas, actuando en nombre y representación de la Aldea Proyectos S.A. y la doctora Margarita María Perdomo Martínez, en calidad de apoderada especial de Helm Fiduciaria S.A. en contra de la Resolución 0127 del 25 de febrero de 2013, expedida por la Subsecretaría Distrital de Planeación.

1. Aclaración previa

Antes de entrar a estudiar el caso, es necesario precisar que la norma aplicable a este trámite es la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), toda vez que la formulación del Plan Parcial fue radicada mediante comunicación del 24 de julio de 2012, complementada y entendiéndose radicada en debida forma el día 24 de agosto de 2012, posterior a la entrada en vigencia de la mencionada ley.

De igual manera, como quiera que con posterioridad a la expedición de la Resolución 0127 del 25 de febrero de 2013 se allegaron al expediente diferentes comunicaciones que pueden tener relevancia en cuanto al caso objeto de estudio, el despacho se pronunciará sobre el particular una vez analice la pertinencia de los argumentos expuestos por las recurrentes.

2. Procedencia

El recurso de reposición presentado por la señora Liliana Hurtado Casas, actuando en nombre y representación de la Aldea Proyectos S.A. y la doctora Margarita María Perdomo Martínez, en calidad de apoderada especial de Helm Fiduciaria S.A., es procedente en los términos del artículo 17 del Código de Procedimiento de Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) y de lo señalado en la resolución recurrida.

3. Oportunidad

La señora Liliana Hurtado Casas y la doctora Margarita María Perdomo Martínez, en calidad de apoderada especial de Helm Fiduciaria S.A., mediante radicación 1-2013-23862 del 22 de marzo de 2013, presentaron recurso de reposición contra la Resolución 127 del 25 de febrero de 2013, expedida por la Subsecretaría de Planeación Territorial. De lo anterior, se tiene que el recurso fue presentado dentro del término de ley, en razón a que la Resolución 127 de 2013 fue notificada por

W



Continuación de la Resolución No. **0514** de 2013 **14 MAYO 2013**

“Por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0127 del 25 de febrero de 2013, expedida por la Subsecretaría de Planeación Territorial”

aviso y que el recurso fue presentando dentro del término establecido por el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

4. Requisitos formales

La interposición del recurso de reposición objeto de estudio se ajusta a lo preceptuado en el artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), toda vez que se presentó dentro del plazo legal, personalmente, por escrito, sustentando los motivos de inconformidad, con la indicación del nombre y dirección del recurrente. Además se verificó que en el presente caso no se surtió la notificación personal por lo que se tiene que su notificación en efecto se surtió por aviso.

5. Problema jurídico

De acuerdo con lo planteado por el recurrente, corresponde al despacho determinar: (i) si en el caso objeto de estudio se configura o no la violación al debido proceso y a la defensa por el presunto error en el cómputo del plazo otorgado a la sociedad Aldea Proyectos S.A. para allegar el estudio de tránsito; (ii) si existe violación a los principios cardinales que rigen la actuación administrativa dentro del procedimiento administrativo relacionado a la formulación del Plan Parcial de Renovación Urbana “El Pedregal”; (iii) si la Resolución 127 de 2013 deviene en ilegal por la aplicación de las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) y (iv) si es posible dar un nuevo plazo de acuerdo a las circunstancias fácticas y excepcionalidades que se han presentado en el trámite bajo estudio.

Para ello, se analizarán la normatividad jurídica aplicable, en especial la Ley 388 de 1997, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), el Decreto Nacional 2181 de 2006, así como los argumentos planteados en el recurso y la demás documentación que reposa en la actuación administrativa.

6. Análisis de los argumentos del recurso de reposición

6.1. Presunta violación al debido proceso y derecho a la defensa habida cuenta del computo equivocado e ilegal del plazo otorgado a Aldea Proyectos para presentar el estudio de tránsito

Manifiestan las recurrentes que, contrario a lo manifestado en la Resolución 127 de 2013, el “*término original de un mes para allegar el Estudio de Tránsito no empezó a correr el (16) de noviembre de 2012, fecha del oficio No. 2-2013-49177, sino que su contabilización inició el veintitrés (23) de*



Continuación de la Resolución No. **0514** de 2013 **14 MAYO 2013**

“Por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0127 del 25 de febrero de 2013, expedida por la Subsecretaría de Planeación Territorial”

noviembre de dos mil doce (2012), que es la fecha en la que el mencionado oficio le fue entregado a Aldea Proyectos S.A.”, razón por la cual en su criterio el “término de un (1) mes allí concedido para la entrega del Estudio de Tránsito vencía el veintitrés (23) de diciembre del mismo año. Ello implica, como se dijo atrás, que la prórroga de cuarenta y cinco (45) días empezaba a contarse a partir del veinticuatro (24) de diciembre de dos mil doce (2012), siendo el veinticuatro (24) de diciembre el día número uno (1) de dicho término)” por lo cual concluye manifestando que “dicha prórroga vencía el veintisiete (27) de febrero de dos mil trece (2013)”.

A renglón seguido, fundamentan su apreciación en una serie de fallos de la Honorable Corte Constitucional en los cuales el máximo tribunal de la jurisdicción constitucional se pronunció sobre la notificación de los Actos Administrativos y concluyen que por los argumentos expuestos se debe revocar la resolución objeto del recurso, pues en su criterio el error en el conteo de los términos vulnera el derecho al “debido proceso” y a la “defensa de la Sociedad Aldea Proyectos S.A.”

6.2. Presunta violación de los principios cardinales de la función administrativa

6.2.1. Presunta violación del principio de coordinación

Para las recurrentes, a pesar de que “*el Distrito Capital ha anunciado una y otra vez que el proceso se llevaría a cabo de forma concertada y coordinada*”, la Secretaría Distrital de Planeación “*no sólo no propició, sino que de manera consciente impidió la total coordinación institucional requerida*”. En su criterio, esta Secretaría pretendió “*trasladar una gestión interadministrativa para solucionar los aspectos de movilidad el plan parcial, con una simple solicitud al promotor para que aporte la solución a aquellos temas cuya discusión y resolución son competencia del Distrito Capital*”.

Consideran que las prórrogas solicitadas por Aldea Proyectos “*tenían como único fin el de lograr el cumplimiento oportuno de los requisitos exigidos por la autoridad de planeación para la aprobación (SIC) de la viabilidad del plan ante la ausencia de una debida coordinación por la Secretaría Distrital de Planeación para resolver las cuestiones técnicas impuestas al proyecto*”, pues considera que al ser “*la estación intermedia de la Calle 100 (...) parte estructurante del Plan Parcial de Renovación Urbana El Pedregal, y que requiere “la total coordinación interinstitucional” de la administración, al promotor del proyecto se le está imponiendo una obligación de imposible cumplimiento, sin que tal coordinación se haya materializado para el efecto*”.

Concluyen su argumentación haciendo un recuento de las actuaciones que, en su concepto, permite identificar la supuesta falta de coordinación y “*coherencia*” en la Secretaría Distrital de Planeación, tales como (i) el trámite que se realizaba ante el “*Sector Movilidad*”; (ii) las condiciones de la estación del sistema de transporte masivo y las características especial del estudio de tránsito; (iii) la supuesta



“Por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0127 del 25 de febrero de 2013, expedida por la Subsecretaría de Planeación Territorial”

promoción de la *“inversión cuantiosa de recursos económicos y técnicos por parte del promotor”* y (iv) la supuesta vulneración del *“aprovechamiento económico derivado del desarrollo urbanístico del suelo incluido dentro del Plan Parcial, situación que en su criterio se ha extendido en el tiempo por razones imputables a la Secretaría Distrital de Planeación”*.

6.2.2. Presunta violación del principio de eficacia

Manifiestan las recurrentes que la Secretaría Distrital de Planeación desconoció este principio pues *“decidió dar por terminado un trámite con fundamento en supuestos obstáculos puramente formales, a pesar de conocer que las otras entidades Distritales y el mismo promotor se encontraban gestionando los asuntos pendientes para lograr la finalidad del presente trámite”*. Consideran que esta decisión desconoce los *“esfuerzos y gestiones que la misma Administración Distrital”* ha realizado para el trámite del Plan Parcial.

En su criterio, los argumentos expuestos reflejan *“un evidente desinterés por parte de la Secretaría Distrital de Planeación en cumplir con una actuación administrativa que se inició hace dos años y que además involucra un tema de interés para la ciudad”*.

6.2.3 Presunta violación del principio de celeridad

Argumentan las recurrentes que la Secretaría Distrital de Planeación, *“no sólo no ha impulsado oficiosamente las actuaciones que le corresponden como líder de la Coordinación Interinstitucional a que alude la Resolución de Determinantes, sino que, por el contrario, ha obstaculizado el proceso relacionado con el Plan Parcial”* pues en concepto de las recurrentes se le impuso una obligación al particular de difícil cumplimiento, frustrando los esfuerzos de otras entidades pertenecientes a la misma administración distrital y violando los términos legales concedidos a favor del promotor y de las otras entidades que expresamente solicitaron plazos para cumplir con los cometidos a su cargo.

6.3. Presunta ilegalidad de la Resolución 0127 de 2013 por aplicación de la figura del desistimiento tácito a un procedimiento administrativo respecto del cual esta figura no puede ser aplicado

Para las recurrentes, el procedimiento administrativo *“tendiente a aprobar o negar los planes parciales contenidos en la Ley 388 de 1997 se rige en su integridad por las disposiciones del Decreto 2181 de 2006, modificado parcialmente y derogado tácitamente en algunos apartes por el Decreto-Ley 019 de 2012”*; razón por la cual, en su criterio, *“dado que el procedimiento de aprobación de planes parciales se encuentra regulado íntegramente por una norma especial, no hay lugar a aplicar a*



Continuación de la Resolución No. **0514** de 2013 **14 MAYO 2013**

“Por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0127 del 25 de febrero de 2013, expedida por la Subsecretaría de Planeación Territorial”

este trámite las disposiciones generales contenidas en la Ley 1437 de 2011, y mucho menos aquellas que gobiernan lo relacionado con el derecho de petición”.

Ante la anterior situación, concluyen las recurrentes, *“la Secretaría Distrital de Planeación se encontraba constitucional y legalmente impedida para aplicar el desistimiento tácito al presente procedimiento administrativo, toda vez que se trata de una figura jurídica contemplada para el trámite de los derechos de petición”*, por lo cual en su criterio *“la Resolución 0127 fue expedida, por una parte, con infracción de las normas en que deberían fundarse y, por la otra, que desconoció gravemente el derecho de audiencia y de defensa de Aldea Proyectos”*.

6.4 Presunta violación del procedimiento legal establecido en la normatividad vigente aplicable al caso

Sobre el particular, las recurrentes realizan una serie de afirmaciones explicando porqué en su concepto los requerimientos realizados con base en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), van en contra de las disposiciones establecidas en el Decreto Ley 019 de 2012 y los Decretos Nacionales 2181 de 2006 y 4300 de 2007.

Luego de realizar dicho análisis, concluye las recurrentes que de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto Nacional 2181 de 2006 *“la Secretaría Distrital de Planeación agotó el único requerimiento que podía realizar durante la actuación administrativa”* siendo claro que *“todo requerimiento posterior (especialmente el contenido en el oficio 2-2012-49177) no suspende ni interrumpe el término para decidir sobre la aprobación del proyecto de Plan Parcial contemplado en el Decreto (SIC) 0019 de 2012”*, por lo cual *“se considera agotada la oportunidad legal en cabeza de la Secretaría Distrital de Planeación para dar aplicación al artículo 9 del Decreto Nacional 2181 de 2006”*.

7. Consideraciones de la Secretaría Distrital de Planeación

7.1. Respecto de la presunta violación al debido proceso y derecho a la defensa habida cuenta del cómputo equivocado e ilegal del plazo otorgado a Aldea Proyectos para presentar el estudio de tránsito

En relación con este aspecto, las recurrentes consideran que la Secretaría Distrital de Planeación se equivocó en el conteo de los términos con los que contaba Aldea Proyectos S.A. para la presentación del estudio de tránsito, pues consideran que el término debe contar a partir del recibido de la comunicación y no de su expedición, para lo cual citan jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional sobre la notificación de Actos Administrativos.



Continuación de la Resolución No. 0514 de 2013 14 MAYO 2013

“Por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0127 del 25 de febrero de 2013, expedida por la Subsecretaría de Planeación Territorial”

En efecto, las jurisprudencias relacionadas en el escrito de reposición hacen referencia a la notificación de los actos administrativos, situación ante la cuál se debería proceder a su aplicación; empero, como en el caso objeto de la alzada las acusaciones versan en contra de una comunicación, no puede afirmarse por ese hecho las reglas propias de la notificación de los actos administrativos le sean aplicables; veamos por qué:

La misma jurisprudencia constitucional y contenciosa administrativa ha establecido de antaño las diferencias fundamentales que existen entre la comunicación y el acto administrativo al punto de afirmar que:

“No se puede decir que la comunicación y la notificación son lo mismo, aunque procuran parecidos pero no idénticos fines; y por lo tanto, el sentido de la norma no puede ampliarse hasta el punto de entender como sinónimos “comunicación” y “notificación”, para aplicarla, indistintamente, en uno u otro caso.

En efecto: Tan evidente es la diferencia sustancial que el legislador ha establecido entre la comunicación y la notificación que una u otra las ha establecido para eventos diversos y a esta última la ha rodeado de formalidades (arts. 44, 45 y 47 del C. C. A.) hasta el punto de que la falta de un requisito o la irregularidad en su práctica, está sancionada con la ineficacia de la misma (art. 48 del C. C. A.); al paso que la comunicación se hace por escrito, sin más solemnidades; e inclusive puede surtirse también verbalmente cuando se trata de contestar peticiones orales (art. 6º, inciso final del C. C. A.). (...) En conclusión, comunicación y notificación son dos fenómenos diferentes, aunque con ambos se pretenda informar al interesado de la existencia de una actuación o de una decisión; en un caso mediante una diligencia rodeada de formalidades y en el otro no.”¹

De igual manera, la Honorable Corte Constitucional² se ha pronunciado sobre el particular manifestando que los efectos de la comunicación se entienden surtidos cuando se remita “*por correo a la dirección que se conozca si no hay otro medio más eficaz*”, dando a conocer claramente tanto el nombre del peticionario, como el objeto de la misma.

Lo anterior no significa un desconocimiento al debido proceso y defensa, toda vez que la comunicación con la cual se requirió el estudio de tránsito hace parte de aquellos actos que la jurisprudencia y la doctrina ha denominado como de trámite, no contentivo de una decisión de fondo, que tan sólo persigue cumplir con el mandato previsto en el parágrafo 2 del artículo 17 del

¹ CONSEJO DE ESTADO. SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Consejero ponente: ANTONIO JOSE DE IRISARRI RES TREPO. Bogotá, D. E. siete (07) de marzo (03) de mil novecientos ochenta y ocho (1988).

² Sobre el particular puede consultarse las Sentencias T-215 de 2006 MP Marco Gerardo Monroy Cabra y Sentencia C-798 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Definición ratificada por las Sentencias C-783 de 2004, M.P. Jaime Araújo Rentería y C-1264 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Cfr., además, la Sentencia T-215 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, referida a un contexto no judicial.



Continuación de la Resolución No. **0514** de 2013 **14 MAYO 2013**

“Por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0127 del 25 de febrero de 2013, expedida por la Subsecretaría de Planeación Territorial”

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), esto es que el interesado realizará una gestión propia a su cargo.

En este contexto, el conteo de los términos para establecer si era pertinente o no proceder al desistimiento de la petición debía realizarse a partir de la remisión de la comunicación, y no de su recibido, como erróneamente lo plantean las recurrentes; por lo cual, al momento de expedir la Resolución 0127 del 25 de febrero de 2013 el tiempo con el que contaba la sociedad comercial Aldea Proyectos S.A. se encontraba vencido, ya que el plazo máximo era el día 20 de febrero de 2013.

Por consiguiente, no puede alegarse una vulneración al debido proceso toda vez que el conteo de los términos se ajusta a los lineamientos que sobre el particular ha establecido la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional; pues comunicación no es sinónimo de notificación, más aún cuando la comunicación en este caso se asimila a un acto de trámite y no de fondo, por lo cual las formalidades propias de la notificación de los actos administrativos no le son aplicables.

En igual sentido, como quiera que el término máximo para allegar el estudio de tránsito era el día 20 de febrero de 2013, la solicitud de prórroga fue extemporánea, ya que se allegó al expediente el día 22 de febrero de 2013, es decir dos (2) días después del plazo máximo establecido para dar cumplimiento al requerimiento. En suma, no existe vulneración al debido proceso como lo pretende hacer ver las recurrentes y sin duda alguna, la solicitud de prórroga fue extemporánea.

7.2. En cuanto a la presunta violación de los principios cardinales de la función administrativa

Sobre el particular, con el fin de analizar los argumentos planteados por las recurrentes, el despacho estudiará los principios que rigen la función administrativa, con el objetivo de concluir si para el caso objeto de estudio existió una vulneración de los mismos.

7.2.1. Presunta violación del principio de coordinación

Sobre el principio de coordinación, manifiestan las recurrentes que la Secretaría Distrital de Planeación *“no sólo no propició, sino que de manera consciente impidió la total coordinación institucional requerida”*. Al respecto debe indicarse que contrario a dicha afirmación, esta Secretaría adelantó las actuaciones que le eran posibles en el marco de sus competencias con el objetivo de gestionar ante las diferentes entidades los conceptos que eran requeridos para poder dar continuidad a la actuación administrativa.



“Por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0127 del 25 de febrero de 2013, expedida por la Subsecretaría de Planeación Territorial”

En este sentido, vale la pena destacar las siguientes actuaciones:

| ACTUACIONES | FECHA | ENTIDAD |
|---------------------|------------|-----------------------------------|
| Oficio 2-2012-36913 | 2012-09-03 | Secretaría Distrital de Movilidad |
| Oficio 2-2012-36941 | 2012-09-03 | Secretaría Distrital de Movilidad |
| Oficio 2-2012-37681 | 2012-09-06 | Secretaría Distrital de Ambiente |
| Oficio 2-2012-37694 | 2012-09-06 | Transmilenio |
| Mesa de trabajo | 2012-09-12 | SDP, SDM y Transmilenio |
| Oficio 2-2012-39350 | 2012-09-18 | Transmilenio |
| Oficio 2-2012-43132 | 2012-10-11 | Transmilenio |
| Oficio 2-2012-45901 | 2012-10-30 | Transmilenio |
| Mesa de trabajo | 2012-11-19 | SDP, SDM y Transmilenio |
| 2-2012-51840 | 2012-12-01 | Ministerio de Defensa |
| 2-2013-00891 | 2013-01-12 | Secretaría Distrital de Movilidad |

Fuente: elaboración propia a partir de la documentación que reposa en el expediente del Plan Parcial de Renovación Urbana “El Pedregal”

Como se puede observar, contrario a lo manifestado por las recurrentes, la Secretaría Distrital de Planeación desarrolló dentro de sus competencias diferentes actuaciones con el objetivo de que las entidades correspondientes se pronunciaran sobre el proyecto de Plan Parcial, así como sobre las condiciones particulares de movilidad que implicaba la propuesta urbanística planteada por la sociedad comercial Aldea Proyectos S.A.

De igual manera, a pesar de que el principio de coordinación impone a la administración pública concertar *“sus actividades con las de otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos”*, no se puede so pretexto de su aplicación obviar las exigencias técnicas y jurídicas obligatorias que establece la normatividad nacional y distrital para la formulación de los proyectos de planes parciales; es decir, la aplicación del principio de coordinación no exonera al promotor del proyecto y a las demás entidades de cumplimiento de sus deberes y obligaciones dentro del mismo.

Ahora bien, en lo que respecta al requerimiento del estudio de tránsito, este no era de imposible cumplimiento o con el objetivo de *“trasladar una gestión interadministrativa para solucionar los aspectos de movilidad el plan parcial, con una simple solicitud al promotor para que aporte la solución a aquellos temas cuya discusión y resolución son competencia del Distrito Capital”*; por el contrario, es evidente que las disposiciones jurídicas aplicables le impone al interesado dicha obligación. Veamos por qué:

El artículo 27 de la Ley 388 de 1997 establece que:

“Los proyectos de planes parciales serán elaborados por las autoridades municipales o distritales de planeación, por las comunidades o por los particulares interesados, de acuerdo con los parámetros que al respecto determine



Continuación de la Resolución No. 0514 de 2013 **14 MAYO 2013**

“Por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0127 del 25 de febrero de 2013, expedida por la Subsecretaría de Planeación Territorial”

el plan de ordenamiento territorial o el Macroproyecto de Interés Social Nacional cuando este último así lo prevea.

(...) Parágrafo 2. Las autoridades ante las cuales se deban adelantar trámites urbanísticos con posterioridad a la adopción del plan parcial estarán obligadas a emitir sus conceptos o permisos con base en lo aprobado en el plan parcial y en su documento técnico de soporte. En todo caso, desde la aprobación del plan parcial se deberán tener definidos y resueltos todos los impactos de la operación sin que se requiera para su ejecución o desarrollo la aprobación de instrumentos de planificación complementarios.” (Subrayado propio)³

En este sentido, el artículo 5 del Decreto Nacional 2181 de 2006, modificado por el Decreto Nacional 4300 de 2007, establece que para la formulación de un Plan Parcial *“Los interesados deberán solicitar a la autoridad de planeación municipal o distrital que señale las normas, defina la delimitación e informe sobre las determinantes aplicables para la formulación del plan parcial”.* (Subrayado propio)”

Para el caso específico del Plan Parcial de Renovación Urbana “El Pedregal”, la administración Distrital, en uso de las facultades anteriormente descritas, y en especial las conferidas en el artículo 6 del Decreto Nacional 2181 de 2006, estableció mediante Resoluciones 0277 de 2011, 0974 de 2011, 1063 de 2011 y 0479 de 2012 las determinantes para la formulación del citado plan parcial, contemplando, entre otras, que el promotor debía:

“Dar cumplimiento al artículo 187 del Decreto 190 de 2004, en el que se establece que: “Todo proyecto de equipamiento y de comercio de escala metropolitana y urbana, deberá estar sustentado en un estudio de tránsito que contenga los análisis rigurosos de la situación con y sin proyecto y de los impactos que genera sobre la movilidad circundante inmediata y de las zonas de influencia. El estudio de tránsito deberá ser aprobado por la Secretaría de Tránsito de Bogotá o la entidad Distrital que haga sus veces.”

En caso que se requiera suprimir o adicionar una vía y/o modificar el trazado de la malla vial prevista en planos aprobados y/o existentes, se debe sustentar la propuesta en el estudio de tránsito. Así mismo se modifique o se quiera suprimir el trazado de una vía, también deberá contar con el aval de las empresas de servicios públicos”.

Como se puede apreciar, la exigencia del estudio de tránsito se fundamenta, por una parte en razón a que el Plan Parcial debe prever, definir y resolver los posibles impactos que a nivel urbano trae consigo su ejecución, y por la otra, que al ser un instrumento que busca la recualificación del territorio mediante el reordenamiento de zonas de la ciudad que por sus condiciones urbanas merecen un mejor aprovechamiento, sus impactos deben ser medidos, más allá de la concepción normativa, en razón a los efectos urbanísticos que trae consigo el englobe de manzanas, la supresión o peatonalización de vías, así como el volumen de personas que son atraídas por los usos que se desarrollen en el proyecto.

³ Numeral 1 del artículo 27 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 180 del Decreto Ley 019 de 2012

WD



Continuación de la Resolución No. **0514** de 2013 **14 MAYO 2013**

“Por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0127 del 25 de febrero de 2013, expedida por la Subsecretaría de Planeación Territorial”

Ahora bien, tampoco puede pretenderse que en virtud del principio de coordinación, un procedimiento administrativo que se encuentra a cargo del interesado deba ser responsabilidad de la administración distrital. En efecto, la aprobación del estudio de tránsito dependía, más allá de la coordinación interinstitucional, de las actuaciones que realizara el interesado ante la Secretaría Distrital de Movilidad; es decir, a pesar de que la decisión sobre la aprobación del estudio de tránsito depende de un pronunciamiento formal de la administración, la favorabilidad del mismo está sujeta al cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas por la administración distrital y de las actuaciones particulares que el promotor realice para tal fin.

Este requerimiento, contrario a lo manifestado por las recurrentes, no es nuevo para el promotor pues era tal su conocimiento que desde el día 16 de mayo de 2011, es decir un año antes de la decisión de los recursos interpuestos contra la Resolución 0277 de 2011, la sociedad Aldea Proyectos S.A. venía adelantando las gestiones tendientes a su aprobación, así:

| RADICADO PROMOTOR PPRU PEDREGAL | CONTENIDO DE RADICADO | FECHA DE RADICACION | RESPUESTA SDM | FECHA DE RESPUESTA SDM |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| SDM-108687 | Metodología Estudio de Tránsito | Octubre 23 de 2012 | SM-101509-12 | Noviembre 2 de 2012 |
| SDM-72177 | Estudio de Tránsito | Julio 23 de 2012 | SD-DSVCT-73737-12 | Agosto 17 de 2012 |
| SDM-119988 | Estudio de Tránsito | Agosto 19 de 2011 | SM-DSVCT-93016-11 | Octubre 5 de 2011 |
| SDM-77903 | Metodología Estudio de Tránsito | Mayo 16 de 2011 | SM-DSVCT-49453-11 | Junio 2 de 2011 |

Fuente: Oficio SDP 1-2012-56916 del 21 de diciembre de 2012 (folio 844-845)

De igual manera, al contrastar las actuaciones desarrolladas por el promotor ante la Secretaría Distrital de Movilidad y las actuaciones surtidas dentro del procedimiento administrativo adelantado ante esta Secretaría, se evidencia que el estudio de tránsito ha sido presentado varias veces y que a la fecha de la solicitud 1-2012-56150 del 14 de diciembre de 2012, no se encontraba radicado ante la Secretaría Distrital de Movilidad trámite alguno, a pesar de que se le había requerido el mismo desde el día 16 de noviembre de la misma anualidad.



Continuación de la Resolución No. **0514** de 2013 14 MAYO 2013

“Por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0127 del 25 de febrero de 2013, expedida por la Subsecretaría de Planeación Territorial”

Por lo expuesto, si bien para la aprobación del estudio de tránsito se requería de la “*aquiescencia*” de distintas entidades para la aprobación del mismo, ello no eximia al promotor de cumplir con el procedimiento y las exigencias técnicas establecidas en el Decreto Distrital 596 de 2007.

En lo que respecta a las conclusiones finales de las recurrentes, relacionadas con la supuesta falta de coordinación esta Secretaría se permite aclarar lo siguiente:

- (i) Tal como se explicó, la aprobación del estudio de tránsito dependía de una gestión a cargo del promotor del proyecto, en cuanto al cumplimiento de los requerimientos y condiciones exigidos por el sector movilidad. De igual manera, debe indicarse que al momento de la expedición del acto administrativo de desistimiento, la comunicación de Transmilenio S.A. no reposaba en el expediente, toda vez que fue allegada formalmente el día 27 de febrero de 2013, razón por la cual no es posible endilgar responsabilidad alguna a esta Secretaría por el desconocimiento de esta comunicación; sin perjuicio de las consideraciones que sobre el particular se harán más adelante.
- (ii) Efectivamente, las condiciones y planteamientos relacionados con la estación y las características no son nuevas para la Secretaría Distrital de Planeación, pues fue ésta quien comunicó al sector movilidad sobre la necesidad de contar con un estudio de tránsito aprobado que respondiera a las dinámicas del proyecto de Plan Parcial planteado por la sociedad comercial Aldea Proyectos S.A.; es decir, fue el mismo proyecto formulado el que planteó las nuevas condiciones de movilidad que requería para su ejecución y que debían ser aprobadas por la Secretaría Distrital de Movilidad, en asocio con Transmilenio S.A.
- (iii) En lo que respecta a las inversiones realizadas, es claro que la presentación de la formulación del proyecto de Plan Parcial en ningún momento significó un compromiso de aprobación por parte de la administración, pues la visión bajo la cual se aprueban los instrumentos de planeamiento no corresponde a la cantidad de recursos invertidos o a la necesidad de contar con un acto administrativo, sino a garantizar el cumplimiento de los objetivos, políticas y estrategias establecidas por la Ley 388 de 1997, el Plan de Ordenamiento Territorial- Decreto Distrital 190 de 2004- y sus instrumentos complementarios.
- (iv) Sobre el aprovechamiento económico de los predios que son de propiedad de la sociedad Aldea Proyectos, debe recordársele a las recurrentes que en el ordenamiento jurídico colombiano solamente se otorgan los derechos de desarrollo y construcción

20



Continuación de la Resolución No. **0514** de 2013 14 MAYO 2013

“Por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0127 del 25 de febrero de 2013, expedida por la Subsecretaría de Planeación Territorial”

una vez se obtenga la correspondiente licencia urbanística, tal como lo establece el artículo 182 del Decreto Ley 019 de 2012 al contemplar que:

“La licencia urbanística es el acto administrativo de carácter particular y concreto, expedido por el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente, por medio del cual se autoriza específicamente a adelantar obras de urbanización y parcelación de predios, de construcción, ampliación, modificación, adecuación, reforzamiento estructural, restauración, reconstrucción, cerramiento y demolición de edificaciones, de intervención y ocupación del espacio público, y realizar el loteo o subdivisión de predios.

El otorgamiento de la licencia urbanística implica la adquisición de derechos de desarrollo y construcción en los términos y condiciones contenidos en el acto administrativo respectivo, así como la certificación del cumplimiento de las normas y demás reglamentaciones en que se fundamenta, y conlleva la autorización específica sobre uso y aprovechamiento del suelo en tanto esté vigente o cuando se haya cumplido con todas las obligaciones establecidas en la misma. (Subrayado propio)

En este sentido, los derechos de desarrollo y construcción, tal como lo expresa la norma ibídem, no se entienden otorgados por el derecho de propiedad, pues su reconocimiento demanda el pronunciamiento por parte de la autoridad administrativa correspondiente, previo cumplimiento de las condiciones y procedimientos establecidos por el Plan de Ordenamiento Territorial.

Las anteriores condiciones se enmarcan dentro de la función pública del urbanismo y administrativa del Estado, las cuales le imponen a la administración pública el desarrollar las actuaciones necesarias para la satisfacción de necesidades generales de todos los habitantes, posibilitando el acceso a las vías públicas, infraestructuras de transporte y demás espacios públicos, y su destinación al uso común, así como atender los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras del interés común, procurando su utilización racional en armonía con la función social de la propiedad a la cual le es inherente una función ecológica, buscando el desarrollo sostenible.

En suma, los argumentos planteados por las recurrentes en este punto no están llamados a prosperar ya que revisado el expediente y la normatividad aplicable se constató que (i) la Secretaría Distrital de Planeación realizó en el marco de sus competencias diferentes actuaciones tendientes a la adecuada coordinación del proyecto; (ii) el promotor del plan parcial tenía pleno conocimiento de la necesidad de contar con la aprobación de un estudio de tránsito que responda a la propuesta urbanística que él pretende desarrollar para la zona objeto de intervención; (iii) que no se han desconocido los pronunciamientos de solicitud de plazos adicionales de Transmilenio, toda vez que no reposaban en la actuación administrativa al momento de la expedición de la



Continuación de la Resolución No. 0514 de 2013 14 MAYO 2013

“Por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0127 del 25 de febrero de 2013, expedida por la Subsecretaría de Planeación Territorial”

resolución de desistimiento y (iv) que los derechos de construcción y desarrollo sólo se concretan mediante la correspondiente licencia urbanística, en los términos del artículo 182 del Decreto Ley 019 de 2012.

7.2.2. Presunta violación del principio de eficacia

La decisión adoptada mediante la Resolución 0127 de 2012 no significa el desconocimiento de las actuaciones administrativas previamente surtidas, ni obedece a un requisito puramente formal, como pretende hacerse ver en el escrito de reposición.

En efecto, tal como se manifestó con anterioridad, la visión bajo la cual se aprueban los instrumentos de planeamiento no corresponde a la cantidad inversiones realizadas o a la necesidad de garantizar la expedición de un acto administrativo, sino a garantizar el cumplimiento de los objetivos, políticas y estrategias establecidas por la Ley 388 de 1997, el Plan de Ordenamiento Territorial- Decreto Distrital 190 de 2004- y sus instrumentos complementarios.

Por estas razones, si bien la incorporación de la estación intermedia de la calle 100 es un tema de interés para la ciudad, no debe olvidarse que el proyecto también debe propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, mediante la definición de la adecuada distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo.

En este sentido, al ser el Plan Parcial de Renovación Urbana “*El Pedregal*” un proyecto de intervención urbana de gran escala, en el cual el componente de movilidad juega un papel importante en su estructuración y desarrollo, la aprobación del estudio de tránsito adquiere mayor relevancia pues permite contar con los insumos técnicos necesarios para establecer:

1. Las cargas generales y locales del proyecto urbanístico.
2. El cumplimiento de las obligaciones urbanísticas definidas en la Resolución de determinantes.
3. Los beneficios o aprovechamientos a los que se tiene derecho en razón a las cargas urbanísticas asumidas por el proyecto urbanístico.
4. La adecuada integración del proyecto con el entorno urbano y la ciudad, así como las condiciones particulares de la implantación de los usos de comercio y servicios.



Continuación de la Resolución No. **0514** de 2013

14 MAYO 2013

“Por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0127 del 25 de febrero de 2013, expedida por la Subsecretaría de Planeación Territorial”

Por ende, al amparo de la función pública del urbanismo y la función administrativa del Estado imponía a la administración pública, ante la ausencia de un estudio de tránsito aprobado y la inexistencia de elementos técnicos que permitieran verificar la incidencia de la propuesta de movilidad para el plan parcial en el desarrollo del proyecto, proceder de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

En este sentido, no puede afirmarse que el desistimiento corresponde a una decisión inhibitoria o que contraría el principio de eficacia, pues la finalidad del procedimiento administrativo tendiente a la adopción del Plan Parcial no puede, ni debe ser entendida exclusivamente a la expedición del acto administrativo de viabilidad o del decreto de adopción, sino que debe propender porque las condiciones particulares del proyecto urbanístico respondan a la consecución de las metas y objetivos que claramente han sido definidos por la ciudad de Bogotá en su Plan de Ordenamiento Territorial – Decreto Distrital 190 de 2004-, para lo cual era de vital importancia conocer las condiciones particulares del estudio de tránsito y su incidencia en el proyecto urbanístico propuesto para el estudio de la Secretaría Distrital de Planeación.

7.2.3. En lo que respecta a la presunta violación del principio de celeridad

Tal cómo se manifestó en el numeral 7.2.1 del presente acto administrativo, la Secretaría Distrital de Planeación impulsó ante las demás entidades distrital las actuaciones tendientes a la definición de las condiciones particulares del estudio de tránsito y su posterior aprobación.

De igual manera, como se explicó en numeral ibídem, la exigencia del estudio de tránsito no era una carga de imposible cumplimiento, toda vez que el promotor tenía conocimiento de la necesidad de contar con el mismo. Tampoco puede afirmarse que se frustró los esfuerzos de otras entidades de la administración, si se tiene en cuenta que fue la misma Secretaría la que motivó el desarrollo de dichas actuaciones y que la comunicación de Transmilenio S.A. fue allegada al expediente tiempo después de proferir el acto administrativo del desistimiento.

En cuanto a los términos legales, debe reiterarse los argumentos expuestos en el numeral 7.1., pues el conteo de los términos se ajusta a los lineamientos que sobre el particular ha establecido la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, más aún si se tiene en cuenta que la comunicación es un acto de trámite y no de fondo, razón por la cual las formalidades propias de la notificación de los actos administrativos no le son aplicables.



Continuación de la Resolución No. 0514 de 2013 14 MAYO 2013

“Por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0127 del 25 de febrero de 2013, expedida por la Subsecretaría de Planeación Territorial”

7.3. En cuanto a la presunta ilegalidad de la Resolución 0127 de 2013 por aplicación de la figura del desistimiento tácito a un procedimiento administrativo respecto del cual esta figura no puede ser aplicados

Independientemente del procedimiento administrativo que se deba seguir para dar trámite a una solicitud, el artículo 13 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) establece que:

Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar el reconocimiento de un derecho o que se resuelva una situación jurídica, que se le preste un servicio, pedir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. (Subrayado propio).

El artículo transcrito define el derecho de petición, en el segundo inciso, como *“toda actuación que inicie cualquier persona”* ante alguna autoridad para *“obtener pronta resolución”*, descripción de la que se resaltan los siguientes elementos: *En el primero se encuentra en la expresión toda actuación con la que inicia la frase, la cual significa que siempre que una persona se dirige a una autoridad lo hace en ejercicio del derecho de petición (...). La palabra actuación en este no debe ser entendida como actuación administrativa sino como cualquier tipo de actuación que se adelante ante una autoridad, de manera que toda solicitud de prestación de un servicio a cargo de la Administración se hace en ejercicio del derecho de petición, y por ello mismo goza de las protecciones legales y judiciales de este derecho fundamental”*.⁴

Ahora bien, en lo que refiere al procedimiento administrativo a seguir para el estudio y aprobación de los Planes Parciales, es claro que la norma especial que regula el procedimiento aplicable es el Decreto Ley 019 de 2012 y las normas establecidas por los Decretos Nacionales 2181 de 2006 y 4300 de 2007; empero, ello no significa que no sea posible aplicar las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) ya que no sólo cualquier actuación que se adelante ante la administración trae consigo el ejercicio del derecho de petición, también el citado Código establece en su artículo 34 que *“Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código”* (Subrayado propio).

En este sentido, contrario a lo manifestado por las recurrentes, la aplicación de la Ley 1437 de 2011 se realizó con total apego a las disposiciones que sobre el particular estableció dicho Código, por lo cual no se vulneró el derecho de audiencia y defensa de la sociedad, pues fue precisamente la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal la que permitió conceder los plazos adicionales que fueron

⁴ ARBOLEDA PERDOMO, Enrique José. Comentarios al Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, Ed. Legis, 2011, Pág. 35.



Continuación de la Resolución No. **0514** de 2013 14 MAR 2013

“Por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0127 del 25 de febrero de 2013, expedida por la Subsecretaría de Planeación Territorial”

solicitados por parte de Aldea Proyectos, situación ante la cual los argumentos planteados no están llamados a prosperar.

7.4. Presunta violación del procedimiento legal establecido en la normatividad vigente aplicable al caso

Sobre el particular, debe reiterarse los argumentos expuestos en el numeral 7.3. del presente acto administrativo, en especial lo referente a la aplicación de las normas establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Ahora bien, en lo que respecta a los requerimientos realizados dentro de la actuación administrativa, el despacho hará las siguientes aclaraciones:

Contrario a como lo pretende hacer ver las recurrentes, los requerimientos de que trata el artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) y el artículo 9 del Decreto Nacional 2181 de 2006, son diferentes y no conllevan necesariamente el requerir la misma información o realizar las mismas actuaciones.

En efecto, de la lectura simple del artículo 17 se puede concluir que el requerimiento de que trata el párrafo primero hace referencia a la complementación de la petición *“ya radicada”*, con el objetivo de poder dar inicio al trámite administrativo; por el contrario el párrafo dos refiere a cuando *“en el curso de la actuación administrativa”* la autoridad advierta *“que el peticionario debe realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión”*.

En igual sentido, el artículo 9 del Decreto Nacional 2181 de 2006 al hacer referencia al requerimiento que puede hacer la administración, lo circunscribe con la finalidad de llevar *“a cabo las actualizaciones, correcciones o aclaraciones que deban realizar al proyecto y/o aporten la información técnica adicional que sea necesaria”* para poder *“revisar el proyecto de plan parcial con el fin de verificar el cumplimiento de las normas urbanísticas y pronunciarse sobre su viabilidad”*

Estas aclaraciones son de vital importancia pues, contrario a lo manifestadas por las recurrentes, es evidente que los fines perseguidos por las normas son diferentes en cada uno de los casos; por lo cual, no puede, ni debe entenderse que la administración ha efectuado las observaciones de que trata el artículo 9 del Decreto Nacional 2181 de 2006, pues hasta el momento sólo se han efectuado los requerimientos de que trata el artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).



Continuación de la Resolución No. 0514 de 2013 14 MAYO 2013

“Por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0127 del 25 de febrero de 2013, expedida por la Subsecretaría de Planeación Territorial”

Coherente con ello, contrario a lo manifestado por las recurrentes, los requerimientos realizados si suspendían la actuación administrativa, pues al permitirse su aplicación dentro del procedimiento, tal como se explicó en el punto 7.3. del presente acto administrativo, los efectos establecidos por el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011 son legalmente válidos, inclusive el término de que trata el oficio 2-2012-54836, por ser un plazo otorgado a solicitud del promotor del Plan Parcial, en el marco de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal.

Por las razones expuestas, los argumentos presentados por las recurrentes en este punto no están llamados a prosperar, toda vez que se demostró que no existe una violación al debido proceso y a la defensa, ya que los términos se contabilizaron de conformidad con lo establecido por la ley y la jurisprudencia; y no existe violación o desconocimiento de los principios que rigen la actuación administrativa, ya que la aplicación del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) se ajusta a los requerimientos establecidos en la ley.

Empero, tal como se manifestó en los puntos 1 y 5 del presente acto administrativo, el despacho hará el análisis de las actuaciones surtidas con posterioridad al 25 de febrero de 2013, fecha de expedición de la Resolución de desistimiento para determinar la pertinencia de la solicitud de revocatoria realizada por las recurrentes en el escrito de reposición.

8. Consideraciones del despacho en cuanto a las actuaciones surtidas con posterioridad al 25 de febrero de 2013

No obstante lo explicado en este documento, con posterioridad a la expedición de la Resolución 0127 del 25 de febrero de 2013, se allegó al expediente del procedimiento diferentes comunicaciones que se relacionan con el acto administrativo objeto del recurso, razón por la cual, como quiera que la información allegada es de vital interés para la actuación administrativa este despacho se pronunciará sobre el particular.

Como se explicó en el numeral 7.2.1., al momento de la expedición de la Resolución de desistimiento existían dentro del expediente las pruebas suficientes para endilgar la responsabilidad en cuanto a la falta de presentación del estudio de tránsito aprobado al promotor del proyecto, pues era éste quien debía presentarlo para su estudio ante la Secretaría Distrital de Movilidad, dentro de los términos establecidos por esta Secretaría.

Lo anterior, se evidencia al contrastar las actuaciones desarrolladas por el promotor ante la Secretaría Distrital de Movilidad y ante esta Secretaría, al punto de que para el 14 de diciembre de 2012, fecha de la solicitud 1-2012-56150, no se encontraba radicado ante el sector movilidad

W



Continuación de la Resolución No. **0514** de 2013 **14 MAYO 2013**

“Por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0127 del 25 de febrero de 2013, expedida por la Subsecretaría de Planeación Territorial”

trámite alguno tendiente a la aprobación del estudio de tránsito, a pesar de que se le había requerido el mismo desde el día 16 de noviembre de esa anualidad.

Sin embargo, con posterioridad a la expedición de la resolución de desistimiento, se aportaron al expediente diferentes comunicaciones que permiten identificar la demora en que incurrió Transmilenio S.A. para adelantar el estudio de la propuesta presentada y expedir su concepto en cuanto al mismo, teniendo en cuenta su complejidad y magnitud. Veamos por qué:

La Secretaría Distrital de Movilidad mediante radicación 1-2013-14182 del 27 de febrero de 2013, informó al promotor del proyecto que “mientras no se cuente con el pronunciamiento positivo del ente gestor del sistema de transporte en la ciudad sobre la propuesta de desarrollo de infraestructura asociada con el componente de operación del transporte público, presentada en el referido informe, no será posible emitir un concepto de aprobación sobre el Estudio de Tránsito presentado” (Subrayado propio). Esta situación fue reiterada por Transmilenio S.A. mediante oficio con número de radicación 1-2013-15214 del 1 de marzo de 2013 al solicitar “extender el plazo del Plan Parcial de Renovación Urbana “El Pedregal”, en razón al “tiempo que ha tardado nuestra entidad [Transmilenio S.A.] para la caracterización del Modelo Operacional de la Carrera Séptima”. (Subrayado propio)

Posteriormente, mediante comunicación 1-2013-21076 del 15 de marzo de 2013, la Secretaría Distrital de Movilidad informó al promotor del Plan Parcial que “Es preciso aclarar, que si bien la evaluación de la operación del proyecto y las medidas de mitigación de impactos propuestas y evaluadas en el área de influencia del proyecto, cuentan con el soporte técnico contenido en el Estudio de Tránsito presentado por los promotores del Plan Parcial de Renovación Urbana El Pedregal (...) no es dable aún la emisión de un concepto favorable desde esta Entidad” hasta tanto la solución transitoria para el desarrollo del Sistema Integrado de Transporte Público cuente con “el aval de Transmilenio S.A.”

Igualmente, mediante radicación 1-2013-21501 del 18 de marzo de 2013, Transmilenio S.A. informó a esta Secretaría que “reconoce la favorabilidad del concepto de la Secretaría Distrital de Movilidad (...) por ser este un proyecto de alta importancia para la efectiva integración modal en la Ciudad Capital”, concepto reiterado mediante comunicación 1-2013-23434 del 21 de marzo de 2013.

En este sentido, la documentación allegada al expediente con posterioridad al 25 de febrero de 2013 permite concluir que, si bien existió falta de diligencia por parte del promotor en cuanto al tiempo que demoró para poner en conocimiento del sector movilidad su propuesta de estudio de tránsito, la demora en la aprobación del mismo obedeció a las actuaciones que debió adelantar Transmilenio S.A en razón a la magnitud del proyecto, tal como lo manifestó en la comunicación 1-2013-15214 del 1 de marzo de 2013.



0514

Continuación de la Resolución No. _____ de 2013 14 MAYO 2013

“Por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0127 del 25 de febrero de 2013, expedida por la Subsecretaría de Planeación Territorial”

Por ende, como quiera que el requisito exigido al promotor no pudo ser allegado dentro de los términos propuestos, no por la falta de coordinación entre las entidades distritales, como erróneamente lo plantearon las recurrentes, sino por la complejidad del proyecto y las actuaciones particulares que debía desarrollar Transmilenio S.A. en torno a el concepto de movilidad, mal haría esta entidad en endilgar responsabilidad al promotor cuando está demostrado en el sub examine que la demora en la aprobación del estudio de tránsito obedeció a dicha empresa.

Por otra parte, como quiera que a la fecha el estudio de tránsito se encuentra aprobado, tal como lo manifestó la Secretaría Distrital de Movilidad mediante comunicación 1-2013-35412, y que dicho oficio es claro al establecer que “[l]os temas urbanísticos se dejan a consideración y aprobación de las entidades competentes ante las cuales se realice los tramites de adopción del Plan Parcial de Renovación urbana”, esta entidad accederá al plazo solicitado en el recurso de reposición, no por los argumentos planteados por las recurrentes, sino por las razones expuestas en este acto administrativo, con el objetivo de que el promotor del Plan Parcial pueda cumplir con los requisitos técnicos y legales que permitan estudiar, en un sólo documento técnico la formulación urbanística del proyecto del Plan Parcial, ajustada al estudio de tránsito que fue aprobado por la Secretaría Distrital de Movilidad.

Esta decisión se adopta buscando garantizar el derecho sustancial sobre la formalidades y lograr con ello la satisfacción de los fines establecidos para el procedimiento administrativo tendiente al estudio de los proyectos de Planes Parciales de Renovación Urbana, toda vez que ello depende del cumplimiento de las normas urbanísticas establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial –Decreto Distrital 190 de 2004- y las Resoluciones 0277 de 2011, 0974 de 2011, 1063 de 2011 y 0479 de 2012.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Revocar la Resolución 127 de 2013, “*Por medio de la cual se declara el desistimiento de la formulación del Plan Parcial de Renovación Urbana “El Pedregal”*” por las razones expuestas en la parte considerativa del presente acto administrativo, y en su lugar conceder el término de cuarenta y cinco (45) días hábiles solicitado en el recurso de reposición, los cuales serán contados a partir de la ejecutoria del presente acto, para que el promotor del Plan Parcial ajuste la propuesta urbanística a las condiciones de movilidad y de transporte aprobadas por la Secretaría Distrital de Movilidad y Transmilenio S.A., con el objetivo de que el promotor pueda cumplir con los requisitos técnicos y legales que permitan estudiar, en un sólo documento técnico la formulación del proyecto del Plan Parcial de Renovación Urbana.

30



Continuación de la Resolución No. **0514** de 2013 **14 MAYO 2013**

“Por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0127 del 25 de febrero de 2013, expedida por la Subsecretaría de Planeación Territorial”

ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar personalmente la presente Resolución a la señora Liliana Hurtado Casas, actuando en nombre y representación de la Aldea Proyectos S.A. y la doctora Margarita María Perdomo Martínez, en calidad de apoderada especial de Helm Fiduciaria S.A. informándoles que en contra del presente acto administrativo no procede recurso alguno.

ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el presente acto administrativo a la Personería Distrital, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, la Secretaría Distrital de Movilidad y a Transmilenio S.A.

Dada en Bogotá D.C., a los **14 MAYO 2013**

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


LILIANA MARÍA OSPINA ARIAS
Subsecretaria de Planeación Territorial

Revisó:

José Antonio Velandia Clavijo - Director de Patrimonio y Renovación Urbana
Francisco Javier Neira Valero - Subsecretaría de Planeación Territorial 